Monterrey, N.L., 30 de septiembre de 2025.

Versión estenográfica de la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, realizada por videoconferencia.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muy buenas tardes.

Siendo las 13 horas con dos minutos del día 30 de septiembre de 2025, da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de la Federación convocada para esta fecha.

Señor Secretario General de Acuerdos, por favor, dé cuenta del quorum legal y del orden del día para esta sesión.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Con su autorización, Magistrada Presidenta, le informo que existe quorum para sesionar válidamente, toda vez que se encuentran presentes, además de usted, el Magistrado Sergio Díaz Rendón y la Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco, integrantes del Pleno de esta Sala Regional.

Los asuntos a analizar y resolver suman un total de 35 medios de impugnación, todos del presente año, mismos que se han identificado con la clave del expediente y el nombre de la parte actora como consta en el aviso de la sesión que ha sido publicado, con la precisión de que el recurso de apelación 60 ha sido retirado.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias.

Magistrada y magistrado, a su consideración el orden del día que propone la Secretaría General.

Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo de manera económica, levantando su mano.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Magistrada Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias.

A continuación, le solicito al Secretario Ricardo Arturo Castillo Trejo dar cuenta de los proyectos que presenta al Pleno la ponencia del Magistrado Sergio Díaz Rendón.

Secretario de Estudio y Cuenta Ricardo Arturo Castillo Trejo: Con su autorización, Magistrada Presidenta, Magistrada, Magistrado.

Se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 54 promovido por una candidatura para controvertir el dictamen consolidado y la resolución del Consejo General del INE que emitió con motivo de la revisión de los informes únicos de ingresos y egresos de gastos en el contexto de la elección judicial en San Luis Potosí.

La ponencia propone confirmar los actos impugnados por las siguientes razones, ya que, al contrario de lo expuesto por la apelante, la obligación de justificar el origen de los ingresos utilizados en campaña exigía que la persona candidata exhibiera los documentos que demostraran desde dónde venían los recursos aplicados en su campaña, comprobación que no se logra con la simple referencia que la transferencia de dinero tenía su origen en una cuenta de su propiedad.

Asimismo, se considera que no es factible otorgar razón a la actora cuando señala que el INE debió ejercer sus facultades de verificación para corroborar la información relativa al origen de sus recursos, pues dicha carga le correspondía a la autora candidata, además porque la omisión de presentar la documentación impedía que la autoridad realizara el contraste de la veracidad de lo manifestado.

También se determina que no es correcta la aseveración de la actora relativa a que la comisión de la infracción depende de que se acredite que los recursos son ilícitos, pues la omisión de acreditar el origen de

los recursos es una infracción que deriva de la falta de cumplimiento a ese deber de hacer.

Finalmente, se estima que los agravios relacionados con la individualización de la sanción son ineficaces, ya que no se ataca en forma específica alguno de los razonamientos en los que la autoridad sustenta su actuación.

Por otra parte, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación 57 de este año, promovido en contra de la resolución del Consejo General del INE por el que se resolvió respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado que le presentó la Comisión de la Fiscalización en lo relativo a la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas juzgadoras correspondientes al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 24-25 en el estado de San Luis Potosí.

En el proyecto, se propone revocar en lo que fue materia de impugnación el dictamen y la resolución combatida, en virtud de que durante el desahogo del procedimiento de fiscalización la autoridad responsable no fue exhaustiva al omitir analizar la contestación del oficio de errores y omisiones, derivado del informe único de gastos de campaña, así como de la documentación ofrecida por el apelante.

Por otra parte, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente RAP-58, promovido por un excandidato para controvertir el dictamen consolidado y la resolución del Consejo General del INE que emitió con motivo de la revisión de los informes únicos de ingresos y egresos de gastos en el contexto de la elección judicial en Tamaulipas.

En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados. Se considera que, al contrario de lo manifestado por la parte apelante, el INE no vulneró en su perjuicio el principio de exhaustividad, pues sí tomó en consideración su escrito de deslinde respecto a los actos que fueron fiscalizados. Sin embargo, este resultó insuficiente para que se configurara algún eximente de responsabilidad frente a los gastos detectados.

Por otra parte, se considera que durante el procedimiento de fiscalización no se vulneró el principio de presunción de inocencia, pues conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la detección de propaganda electoral genera la presunción de beneficio en favor de la candidatura, por lo cual tiene la carga de demostrar que no le es atribuible, lo que tiene que realizar en forma oportuna y suficiente.

En otro aspecto, se considera que los agravios relacionados con la individualización son genéricos, por lo cual no son aptos para demostrar que haya existido alguna irregularidad en la imposición de la sanción.

A continuación, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación 65 de este año, promovido en contra de la resolución del Consejo General del INE por el que se resolvió respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado que le presentó la Comisión de Fiscalización en lo relativo a la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras, correspondientes al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local en el estado de Coahuila de Zaragoza.

En el proyecto se propone modificar, en lo que fue materia de impugnación, el dictamen y la resolución combatida al determinarse lo siguiente:

En la conclusión 04-CO-JPJ-EFSO-C3, durante el desahogo del procedimiento de fiscalización, la autoridad responsable no fue exhaustiva al omitir analizar cabalmente los planteamientos expresados por la apelante en su respuesta al oficio de errores y omisiones, así como de la documentación allegada.

En cuanto a las conclusiones 04-COJPJ-EFSO-C1 y 04-COJPJ-EFSO-C2, la autoridad responsable sí analizó y valoró la documentación aportada, sin que ante esta instancia la persona recurrente controvierta de forma frontal y directa las consideraciones que expuso la autoridad responsable para tener por no atendidas las observaciones que fueron efectuadas.

Respecto a la conclusión 04-COJPJ-EFSO-C4, se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que el artículo octavo, inciso c), y la definición de cuenta bancaria, ambos de los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial Federal y locales, únicamente imponían la obligación de realizar los pagos de gastos de campaña de una cuenta específica, por lo que debe dejarse sin efectos, al igual que la sanción impuesta.

En otro aspecto, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los recursos de apelación 69 y 71 de este año, promovidos por una excandidatura, para controvertir el dictamen consolidado y la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emitió con motivo de la revisión de los informes únicos de ingresos y egresos de gastos en el contexto de la Elección Judicial en San Luis Potosí.

En el proyecto se propone acumular los expedientes, ya que en ambos se impugnan los mismos actos.

Por otra parte, se estima pertinente desechar la demanda relativa al recurso de apelación 71, ya que el escrito se presentó en forma digital y no contiene firma autógrafa, por lo que resulta improcedente.

En cuanto al fondo, se propone dar respuesta a los planteamientos del apelante de la siguiente forma.

Se estima que no es viable concederle la razón a la actora en el agravio relativo a la improcedencia de sancionarla por la presentación extemporánea del formato de actividades vulnerables, pues en efecto, la otrora candidatura tenía la obligación de presentarla a los tres días posteriores a que le fueran proporcionadas las claves de acceso al MEFIC.

Sin embargo, la presentó hasta el periodo de corrección. Asimismo, se concluye que se acreditó la vulneración a la obligación de realizar el pago al personal de apoyo a través de cheque o transferencia, ya que éste se realizó en efectivo, por lo cual era viable imponer una sanción por dicha irregularidad.

Por otra parte, se considera que le asiste la razón cuando señala que no le era imputable alguna infracción por no utilizar una cuenta en forma

exclusiva para administrar los gastos de campaña, pues conforme a la interpretación que ha dado esta Sala Regional a la normativa, la obligación que los lineamientos imponían a las candidaturas era la de realizar los pagos exclusivamente desde una cuenta. Por ende, la fundamentación y motivación que se utilizó para decretar la infracción e imponer una sanción fue indebida.

Por otra parte, se considera que son ineficaces los motivos de disenso relacionados con la identificación de la propaganda detectada por internet, pues son manifestaciones genéricas que no atacan las consideraciones de la autoridad.

Finalmente, se estima que los agravios relacionados con individualización de la sanción también son ineficaces, pues se trata igualmente de manifestaciones que no controvierten el fondo de las razones aportadas por la autoridad.

Enseguida se da cuenta con el recurso apelación 77 de este año promovido por un excandidato para controvertir el dictamen consolidado y la resolución del consejo general del INE que emitió con motivo de la revisión de los Informes Únicos de Ingresos y Egresos de Gastos en el contexto de la Elección Judicial de San Luis Potosí.

En el proyecto se propone calificar como inatendibles los agravios relacionados con la falta de valoración de pruebas relacionadas con el pago de personal de apoyo, ya que en el dictamen no se imputó alguna infracción por esa causa.

Por otra parte, se estima que son infundados los agravios relacionados con la comprobación del origen de los recursos pues no basta con que se demuestre que la cuenta de origen es propiedad de la persona candidata, pues es necesario que justifique la razón por lo cual se recibieron ingresos de dinero.

En el caso se tiene que si bien se detectó la percepción de ingresos no se justificó su origen, es decir, si se trató de pagos de nómina, honorarios, intereses financieros, etcétera y por esa causa pasen a formar parte del patrimonio de la persona fiscalizada.

En el proyecto se enfatiza que la obligación de acreditar el origen de los recursos es acorde a la exigencia de autofinanciamiento de las campañas de candidaturas judiciales contenidos en la Constitución, la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales y en los lineamientos porque excluyen la posibilidad de que cualquier otro ente aporte algún recurso.

También se consideran infundados los agravios relacionados con la justificación de gastos pues el apelante no expone agravios para demostrar que la documentación que presentó dejó de ser analizada.

Finalmente se considera que son ineficaces los agravios relacionados con la individualización de la sanción, pues son genéricos.

Asimismo se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación 84 de este año promovido en contra de la resolución del consejo general del INE por el que se resolvió respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado que le presentó la Comisión de Fiscalización en lo relativo a la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial local 24-25 en el estado de Coahuila de Zaragoza.

En el proyecto se propone modificar en lo que fue materia impugnación el dictamen y la resolución combatida al estimarse que respecto a la conclusión 04-CO-JPJ-LFMF-C2 se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda vez que el artículo 8, inciso c) y la definición de cuenta bancaria, ambos de los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial Federal y locales únicamente imponían la obligación de realizar los pagos de gastos de campaña de una cuenta específica, por lo que debe dejarse sin efectos y, en consecuencia, la sanción impuesta.

En otro aspecto, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación 88 de este año, promovido en contra de la resolución del Consejo General del INE por el que se resolvió el informe de ingresos y egresos relacionados con la elección del Poder Judicial del estado de Coahuila de Zaragoza.

En el proyecto se propone modificar en lo que fue materia de impugnación el dictamen y la resolución combatida, al estimarse que la conclusión relacionada con el uso de una cuenta exclusiva se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues al igual que en los otros casos se estima que el artículo 8, inciso C, y la definición de cuenta bancaria, ambos de los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial Federal y locales, únicamente imponían la obligación de realizar los pagos de gastos de campaña de una cuenta específica, por lo que debe dejarse sin efectos la sanción impuesta.

Finalmente, se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación 92 de este año, promovido en contra de la resolución del Consejo General del INE, emitida en relación al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 24-25 del estado de San Luis Potosí.

En el proyecto se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución combatida al determinarse que, contrario a lo señalado por el recurrente, la citada resolución sí se encuentra fundada y motivada, pues la autoridad responsable sí señaló las razones y normas por las cuales determinó sancionar al candidato, sin que ante esta instancia se controviertan de manera frontal y directa las consideraciones que expuso la autoridad responsable. Lo anterior, en la forma que se detalla en los proyectos correspondientes.

Es la cuenta, Magistrada Presidenta, Magistrada, Magistrado.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias, Secretario.

Magistrada y Magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de la cuenta.

¿Si hay alguna intervención?

Si no hay intervenciones, tomen la votación, señor.

Magistrado Sergio Díaz Rendón: Perdón, Magistrada.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Adelante, Magistrado, adelante.

Magistrado Sergio Díaz Rendón: Yo quisiera hacer una breve intervención sobre estos asuntos.

En los asuntos que se acaba de dar la cuenta, yo quisiera destacar dos cuestiones muy elementales que se presentaron en varios de estos recursos de apelación.

El primero de ellos o el primer tema, tiene que ver con una interpretación que se hizo por parte de la ponencia, con base en el principio de pro persona a favor de los justiciables.

Esto consiste en que, a pesar de que no se especifique la conclusión de manera clara, la conclusión que le causa agravio al justiciable, para la ponencia fue suficiente con identificar, con que se identificara la resolución o dictamen que se impugna y que se señalen los elementos que permitan determinar las conclusiones a cuestionar dentro de los mismos.

Por supuesto que esto no implica una suplencia total de la queja, sino que al tratarse de manifestaciones que conllevan a la necesidad de realizar un estudio exhaustivo sobre la totalidad de la controversia es que se flexibiliza este criterio y se interpreta a favor de la persona.

¿Con qué finalidad?

Con la finalidad de que los agravios no sean calificados como ineficaces al considerarse que estos son genéricos.

Por supuesto que esto, en términos generales, beneficia el derecho de acceso a la justicia prevista por nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, se presentó bajo estos términos estos proyectos, y agradezco, por supuesto, a mis compañeros de Pleno por ser sensibles a esta cuestión que fue sometida a su consideración, y por los comentarios que me hicieron para poder enriquecer esta visión que se plasmó en estos proyectos.

Y el segundo tema que tiene que ver con diferentes recursos de apelación como el 65, 69, 84, 71, 88 y 91, que se acaba de dar la cuenta de los mismos, tiene que ver también con un tema que se volvió recurrente en estos medios de impugnación. Y esto tiene que ver con que el Instituto Nacional Electoral impuso una serie de multas para aquellas candidaturas que no habían registrado una, que la cuenta que registraron en el MEFIC para erogar sus gastos de campaña no fue utilizada de manera exclusiva para la campaña.

Sin embargo, me parece que eso es un criterio equivocado. Es decir, efectivamente se tenía que registrar una cuenta ante el MEFIC para que de ahí se inyectara dinero a la campaña y que fuera más fácil hacer la fiscalización debida.

Creo, desde mi perspectiva, que lo deseable hubiera sido que efectivamente se tuviera una cuenta exclusiva para hacer una fiscalización más fácil.

Pero esta era una cuestión que era potestativa para las candidaturas. Es decir, las candidaturas tenían la posibilidad de registrar una cuenta, y de esa cuenta que se inyectara el dinero a la campaña, de ahí se realizaban los gastos para la campaña, pero el candidato o la candidata tenía la posibilidad de seguir utilizando esa cuenta para otro tipo de gastos y otro tipo de retiros y otro tipo de depósitos.

Insisto, creo que lo deseable era tener una cuenta exclusiva, pero no era un aspecto obligatorio para las candidaturas.

En ese sentido no existía una exigencia explícita referente a que las cuentas que se deben de reportar en el FIC sean solamente para reportar gastos de campaña.

¿Qué sucedió? Que algunas candidaturas que registraron esta cuenta y que en esta cuenta llevaron a cabo otro tipo de movimientos, pues derivó en una serie de multas.

Es por eso que los proyectos que acabo de mencionar proponen modificar la fiscalización que hizo el INE y las multas que impuso para

que se considere que no existía una exigencia de que la cuenta se usara de manera exclusiva para esos fines de la campaña.

Es cuanto, Presidenta.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias.

¿Alguna otra intervención?

Al no haber más intervenciones, señor Secretario General tome la votación sobre estos asuntos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Con su autorización, Magistrada Presidenta.

Magistrado Sergio Díaz Rendón.

Magistrado Sergio Díaz Rendón: Con mis proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco.

Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco: A favor de todos los proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Magistrada Presidenta María Dolores López Loza.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Con los proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Magistrada Presidenta, le informo que los asuntos aprobaron por unanimidad de votos.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias, señor Secretario.

En consecuencia, en los recursos de apelación 54, 58, 77 y 92 se resuelve en cada uno de ellos.

Único.- Se confirman las resoluciones impugnadas.

Por otra parte, en el recurso de apelación 57, se resuelve:

Primero.- Se revoca en la materia de impugnación la resolución controvertida.

Segundo.- Se ordena al Consejo General del INE que proceda conforme a lo señalado en el apartado de efectos del presente fallo.

En cuanto a los recursos de apelación 65, 84 y 88, se resuelve en cada caso.

Primero.- Se modifican en materia de controversia las resoluciones impugnadas.

Segundo.- Se ordena al Consejo General del INE que proceda conforme a lo señalado en el apartado de efectos de los presentes fallos.

En los recursos de apelación 69 y 71 se resuelve:

Primero.- Se acumulan los expedientes.

Segundo.- Se desecha de plano la demanda de los recursos de apelación 71 de 2025.

Tercero.- Se modifica el dictamen consolidado, así como la resolución impugnada en los términos precisados en el apartado de efectos de la sentencia.

Cuarto.- Se vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo las acciones precisadas en el apartado de efectos del presente fallo.

A continuación les solicito al señor Secretario Ricardo Aguilar, por favor, dé cuenta con los proyectos que propone su servidora a este honorable Pleno.

Secretario de Estudio y Cuenta José Ricardo Aguilar Torres: Con la autorización del Pleno.

Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio general 74 de este año, promovido por un ciudadano en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León que sobreseyó el diverso juicio contra el acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, que lo inscribió en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, al considerar que era improcedente, sobre la base de que el escrito de demanda no tenía firma autógrafa.

En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada porque el impugnante parte de la premisa errónea al considerar que el Instituto Estatal Electoral es la autoridad facultada para recibir y tramitar medios de impugnación que le corresponde resolver al Tribunal Electoral de Nuevo León.

Además, en todo caso, lo jurídicamente relevante es que el escrito presentado era escaneado, enviado por correo electrónico, sin firma autógrafa de puño y letra y, en ese sentido, no era suficiente para acreditar la autenticidad de la voluntad para presentar el medio de impugnación.

Por otro lado, doy cuenta con ocho recursos de apelación, todos de este año, interpuestos por quienes en su momento fueron personas candidatas a juzgadoras, en contra de las respectivas resoluciones que determinaron sancionar a las partes apelantes, emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes únicos de gastos de sus campañas, correspondientes a los procesos electorales extraordinarios del Poder Judicial de sus respectivas entidades federativas 2024-2025.

El primer proyecto de la cuenta es el expediente 50, interpuesto por el entonces candidato a Juez de primera instancia en materia laboral en Tamaulipas.

En el proyecto se propone modificar la determinación impugnada porque:

Uno. Respecto a la cancelación o modificación de un evento registrado en el MEFIC sin cumplir con el plazo de 24 horas previas a su realización, el recurrente tiene razón porque la autoridad no valoró la contestación que dio al responder el oficio de errores y omisiones relativa a que realizó un registro duplicado en el sistema.

Dos. En cuanto que se registró un ingreso en el MEFIC sin comprobar que el recurso proviene de su patrimonio, el recurrente tiene razón porque el INE no tomó en cuenta lo que señaló en el escrito de que el ingreso provenía de la venta de fondos de inversión, y

Tres. Respecto a la omisión de utilizar una cuenta bancaria exclusiva para campaña, el recurrente tiene razón porque los lineamientos no establecen el uso de una cuenta bancaria exclusiva.

Doy cuenta también con el proyecto relativo al recurso de apelación 52, interpuesto por un ciudadano que fue candidato a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.

En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada toda vez que son ineficaces por genéricos los agravios por los que sostiene que la resolución adolece de la debida fundamentación y motivación, así como aquellos por los que afirma la autoridad fue omisa en señalar los criterios utilizados para la imposición de sanciones y multas, porque se trata de manifestaciones que no se vinculan de forma específica con alguna conducta irregular que le haya sido atribuida y no proporciona elementos que permitan identificar cuál o cuáles conclusiones son las que concretamente le causan una afectación.

Doy cuenta con el diverso proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 56 interpuesto por quien fue candidato a ser persona juzgadora en el estado de San Luis Potosí.

La ponencia propone modificar la resolución y dictamen controvertidos porque respecto de la conclusión vinculada con el uso de una cuenta bancaria exclusiva para el gasto de campaña, esta Sala Regional considera que dentro de la normativa aplicable no se exigió explícitamente que la cuenta que se reportara en MEFIC fuera sólo para usarla con movimientos de gastos de campaña. En ello radica la incorrecta apreciación de la autoridad fiscalizadora.

Finalmente, por lo que hace al resto de conclusiones impugnadas, se estima que los agravios planteados por el recurrente son infundados, como se argumenta en el proyecto.

Igualmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 59 interpuesto por la entonces candidata Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.

En el proyecto se propone modificar la determinación impugnada porque:

Uno. Respecto a la omisión de presentar documentación que compruebe el gasto de 25 volantes, la recurrente tiene razón porque el INE no tomó en cuenta lo que expuso la candidata en relación a que no realizó el gasto de los volantes.

Dos. En cuanto a la omisión de reportar gastos en tiempo real en el MEFIC, la recurrente tiene razón porque el gasto realizado con la renta de un vehículo, la autoridad fiscalizadora precisó una temporalidad errónea, pues señaló que el gasto se realizó el 21 de octubre de 1943, fecha en la que evidentemente no pudo realizar el gasto.

Tres. Finalmente, en relación al supuesto gasto prohibido de publicidad pagada en el Periódico Plano Informativo, la impugnante tiene razón porque no está acreditado que la candidata hubiera participado en la elaboración y/o contratación de la publicidad en el periódico.

Además, la autoridad fiscalizadora debió tomar en cuenta que era materialmente imposible para las candidaturas de la elección judicial que conocieran y reprocharan conductas realizadas por terceros, ya que no cuentan con un equipo para estar monitoreando todo lo que se contrata, paga y difunde en determinados territorios.

Enseguida doy cuenta con el proyecto relativo al recurso de apelación 62 interpuesto por quien fue candidato a juez en materia Civil del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada toda vez que la autoridad cumplió con su obligación de fundar y motivar su

determinación, respetó el derecho de audiencia de la persona candidata, los gastos que estimó como no reportados derivaron de los hallazgos detectados en el monitoreo en páginas de internet y así lo dio a conocer la autoridad al sujeto obligado, proporcionando los datos que acreditaban su existencia, por lo que estuvo en aptitud de expresar sus aclaraciones y remitir la información y documentación que considerara pertinente sin que lo haya hecho así.

Y finalmente, contrario a lo que sostiene el recurrente, la omisión de presentar los archivos XML vulnera la legalidad y la certeza del destino y aplicación de los recursos.

Doy cuenta también con el proyecto relativo al recurso de apelación 73, interpuesto por quien fue candidato a Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí.

En el proyecto se propone modificar la resolución impugnada a fin de dejar sin efectos tres conclusiones por las siguientes razones respectivamente.

A. La documentación que estimó faltante la autoridad no es aplicable a los gastos debidamente acreditados.

B. El recurrente cumplió con el aviso de un evento conforme a la excepción prevista en la normativa aplicable.

C. La responsable no se pronunció sobre la documentación que la persona candidata presentó al momento de desahogar las observaciones realizadas mediante el Oficio de Errores y Omisiones.

En consecuencia, se ordena al Consejo General emita una nueva resolución en la que valore la documentación presentada por el sujeto obligado en relación con los estados de cuenta y cuantifique nuevamente la sanción a imponer, tomando en consideración las conclusiones que subsisten.

Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 76 interpuesto por quien fue candidata a persona juzgadora en el estado de Tamaulipas.

La ponencia propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el dictamen y resolución impugnados porque contrario a lo que señaló la parte recurrente, la responsable, entre otras cosas, sí estableció las razones que llevaron a considerar que el apelante omitió realizar el recurso de gastos por concepto de volantes con propaganda electoral.

Además, sí tomó en cuenta la capacidad económica del infractor para graduar las multas impuestas.

Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 85 interpuesto por quien fue candidata a persona juzgadora en el estado de San Luis Potosí.

La ponencia propone modificar el dictamen y resolución impugnados porque se considera que la renta de un vehículo no se encuentra prohibida ni tiene sustento jurídico en la normatividad aplicable al proceso electoral de personas juzgadoras.

Además, que la recurrente sí registró en el MEFIC la totalidad de los estados de cuenta de abril y mayo que le fueron observados en la etapa de revisión de la fiscalización y la presentación de los archivos XML y PDF de los gastos observados permiten a la autoridad fiscalizar los gastos de las candidaturas, sin que la ausencia de ticket obstaculice ese ejercicio.

Es la cuenta, Magistrada Presidenta, señora Magistrada, señor Magistrado.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias, señor Secretario.

Magistrada y magistrado, está a su consideración los proyectos de la cuenta.

¿Hay alguna intervención?

Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco: Sí, Presidenta.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Adelante, Magistrada.

Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco: Únicamente para intervenir en el asunto 14 de la lista, el RAP-59. Con su venia.

En esta sesión estamos resolviendo diversos asuntos relacionados con fiscalización, de revisión de informes de diversas candidaturas que contendieron para diversos cargos de elección popular, concretamente para integrar poderes judiciales de diversas entidades, en este caso para una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia del estado de San Luis Potosí.

Si bien coincido con el sentido que se nos propone y de la cual se nos ha dado cuenta, anticipo que emitiría un voto concurrente, dado que en esta ocasión, de manera muy respetuosa, Presidenta, no comparto el análisis que se realiza respecto de dos conclusiones, concretamente las identificadas como C4 y C5. La primera de ellas que ve al reporte de gastos por la contratación de propaganda impresa y la segunda de ellas por volantes.

Respecto a la conclusión C4, la relacionada con gastos de volantes, la razón por la cual no comparto la propuesta que se nos presenta es porque del análisis que realizamos como ponencia al escrito de apelación de la recurrente que se nos presenta ante esa instancia y que hoy decidimos, no localizamos o no detectamos un agravio o un principio de agravio que nos lleva a analizar de manera frontal el análisis que realizó la autoridad fiscalizadora, el Consejo General del INE, más allá de un agravio general que sí localizamos de fundamentación y motivación o indebida fundamentación y motivación.

Lo que advertimos de la revisión de las constancias del expediente es que, tanto en el dictamen consolidado a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización como en la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es que sí se brindaron las razones, los motivos de hecho y de derecho por los cuales la autoridad consideró que se acreditaba la irregularidad, esto es, el reporte de gastos por concepto de 25 volantes.

Respecto de este planteamiento, nada más localizamos la falta de fundamentación y motivación, la cual, desde nuestra óptica, se encuentra desvirtuada o no podemos transitar con el hecho de analizar

de manera frontal a no localizar un agravio, la legalidad de lo decidido por la autoridad. Y aún en el supuesto de advertir que hay un principio de agravio, me lleva a apartar de la propuesta presentada, dado que lo que localizamos es que el origen de la observación detectada por la autoridad, por el Consejo General del INE, es que los volantes se localizaron o se dio cuenta la propia autoridad que existió una propaganda impresa por cuestión de volantes, por la entrega de estos, fue de un monitoreo o de una visita de inspección que la propia autoridad se constituyó en un evento en el cual no solamente estuvo la candidata sino otros dos candidatos.

Entonces, no podría considerar, desde mi perspectiva, que efectivamente ella no tuvo conocimiento o desconocía o que no realizó ningún gasto por volantes.

Ahora bien, respecto de la diversa conclusión la identificada con el número 4, que es por gastos de propaganda impresa, la apelante sostiene ante nosotros que no existe una prueba plena, que el INE no demostró que ella efectivamente tenía una vinculación o que contrató con el periódico en el cual apareció una nota respecto de su candidatura por una entrevista, que ella no realizó ningún gasto, que no está demostrada, insisto, la contratación.

Frente a ello, lo que desde mi óptica me lleva a separarme de la propuesta es que aun cuando no existe una prueba plena, lo cierto es que sí hay indicios suficientes para determinar que ella tenía conocimiento de este gasto, de esta propaganda impresa en la cual resultó beneficiada.

¿Por qué? Porque es una entrevista en la cual aparece lo que ella misma le comentó al periódico en el cual aparecen las notas respecto de su candidatura y una imagen.

Entonces, si bien es cierto no existe en el expediente un elemento en el cual se demuestre que ella contrató la propaganda, lo cierto es que desde mi perspectiva hay indicios suficientes para estimar que tenía noticia, que tenía conocimiento o por lo menos que había elementos mínimos por los cuales podía hacerse sabedora de que existió esa propaganda sin que esté acreditado el deslinde respectivo.

Esa es la razón que me lleva a separarme de la propuesta por esas dos consideraciones, aun cuando comparto el sentido.

Es cuanto.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias.

Si me permite, Magistrada, nada más para hacer una reflexión.

Después del análisis integral del expediente, se advierte que no existe ninguna prueba fehaciente de que la candidata haya contratado, instruido, pagado ninguna inserción en ningún medio de comunicación.

Tampoco se acredita que hubiese tenido conocimiento previo de la difusión de esa nota periodística ya que la autoridad responsable, me refiero a la Unidad Técnica Jurídica, no aportó un solo elemento que permita llegar a la conclusión de lo contrario, y exigir entonces responsabilidad en ausencia de pruebas directas sería desproporcionado.

Máxime en un contexto como el de la elección judicial, en donde las candidaturas no cuentan con ninguna estructura ni equipos que les hubieran permitido monitorear permanentemente la contratación de espacios en prensa escrita o en ninguna otra actividad.

Entiendo que se plantee el hecho de que la candidata haya dado una entrevista en un medio que constituye un indicio de conocimiento. Sin embargo, este razonamiento no resiste el análisis probatorio porque ser entrevistado no equivale, como ya lo mencioné, a pagar, a contratar, a autorizar o a solicitar alguna eventual publicación en ningún medio impreso, y la sola realización de la entrevista por sí misma no permite inferir este tipo de contrataciones.

Lo razonable, entonces sería distinguir entre el contenido periodístico propio de la labor del medio de comunicación y la publicidad electoral que exige un pago o contratación, porque de lo contrario nos llevaría a sancionar a candidaturas por actos de terceros que escapan al control de las propias candidaturas.

Y por estas razones es que sostendré en todos sus términos el proyecto.

Muchísimas gracias.

¿Alguna otra intervención?

Magistrado Sergio Díaz Rendón: No, Magistrada. Gracias.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias.

Al no haber intervenciones.

Señor Secretario, tome la votación sobre estos asuntos, por favor.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Con su autorización, Magistrada Presidenta.

Magistrado Sergio Díaz Rendón.

Magistrado Sergio Díaz Rendón: A favor de los proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña:
Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco.

Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco: A favor de los proyectos, con anuncio de un voto concurrente en el recurso de apelación 59, Secretario.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña:
Magistrada Presidenta María Dolores López Loza.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Con los proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña:
Magistrada Presidenta, le informo que los asuntos aprobaron por unanimidad de votos, con la precisión de que la Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco anuncia la emisión de un voto concurrente en el recurso de apelación 59.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: En consecuencia, en el juicio general 74, así como los recursos de apelación 52, 62 y 76, se resuelve en cada asunto:

Único.- Se confirman las resoluciones impugnadas.

Por otra parte, en los recursos de apelación 50, 59 y 85, se resuelve en cada caso:

Único.- Se modifican en la materia de controversia los dictámenes consolidados y resoluciones cuestionados para los efectos precisados en las ejecutorias.

En cuanto al recurso de apelación 56, se resuelve:

Primero.- Se modifica en la materia de impugnación la resolución controvertida.

Segundo.- Se vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que se lleven a cabo las acciones previstas en el apartado de la sentencia.

En cuanto al recurso de apelación 73, se resuelve:

Primero.- Se modifica en la materia de impugnación la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en la sentencia.

Segundo.- Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proceda conforme a los señalados en el apartado del fallo de este asunto.

A continuación, le voy a solicitar al señor Secretario Celedonio Flores Ceaca, dar cuenta con los proyectos de la Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco, que somete a consideración del Pleno.

Secretario de Estudio y Cuenta Celedonio Flores Ceaca: Con la autorización del Pleno.

Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía 171 de este año, promovido por Jesús Aurelio Acroy Mendoza de la Lama y otras personas contra la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas que, entre otros aspectos, desechó su demanda por considerar que se presentó de forma extemporánea.

La ponencia propone confirmar la sentencia impugnada porque se considera que la resolución del Instituto Electoral Local, inicialmente controvertida ante el Tribunal responsable, fue notificada al representante del PRD Zacatecas desde el 2 de julio, al haber estado presente en la sesión en la que se aprobó, sin que exista el deber legal de notificarla a la militancia en general. Además, esa determinación fue publicada el mismo día en la página de internet del referido Instituto, por lo que en todo caso el plazo de cuatro días transcurrió del 3 al 8 de julio, mientras que la demanda local se presentó hasta el 11 siguiente, esto es, de forma extemporánea, como concluyó el citado Tribunal.

Ahora doy cuenta con el proyecto relativo a los juicios generales 71 y 72 del presente año, interpuestos por Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz, entonces candidato a la Presidencia Municipal de San Felipe, Guanajuato y el Partido Verde Ecologista de México, contra la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral de dicha entidad, en un procedimiento sancionador en la que, entre otras cosas, determinó la existencia de la infracción consistente en el uso indebido de la imagen de personas menores de edad en propaganda electoral y sancionó a los actores.

Previa propuesta de acumulación, la ponencia propone confirmar la resolución impugnada en lo que fue materia de impugnación, pues contrario a lo que aducen los promoventes se considera, por una parte, que no vulneró su derecho al debido proceso. Además, es correcta la conclusión del Tribunal Local en cuanto a que el perfil de la red social Facebook en que se difundió la propaganda pertenece al candidato denunciado.

Enseguida, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los recursos de apelación 53, 68, 70, 81 y 91, todos de este año, interpuestos por diversas candidaturas a cargos de elección judicial contra las resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que lo sancionó por irregularidades en la revisión de sus

informes únicos de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 en los estados de San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas.

En cuanto al recurso interpuesto por Jorge Adrián Castro Santillán, la ponencia propone modificar la determinación impugnada, porque se considera que la autoridad fiscalizadora vulneró el derecho de audiencia al omitir, precisar y detallar los eventos que observó como no reportados en la agenda del sujeto fiscalizado.

Y en cuanto al deber del recurrente de realizar el registro contable de operaciones en tiempo real, se advierte que lo hizo de manera extemporánea.

Por lo que hace el recurso interpuesto por David Cobián Rodríguez, la propuesta es revocar la resolución impugnada al considerar que la autoridad fiscalizadora vulneró el derecho de audiencia del recurrente debido a que no precisó los eventos que observó como no reportados en la agenda.

Además, se considera incorrecto que la autoridad responsable sancionara al apelante por depósitos y/o retiros supuestamente no vinculados con la campaña, porque en el dictamen no precisó a qué depósitos o retiros se refiere, además de que no se encuentra prohibido por la normativa.

Respecto del recurso de María Sara de la Luz Bernal Ramírez, la ponencia propone confirmar la resolución impugnada al considerarse que, de manera correcta, la autoridad fiscalizadora tuvo por acreditada la infracción por la omisión de presentar un ticket por gasto de alimentos, aunado a que la parte recurrente no señaló que se acredita que se acreditará con algún otro comprobante. También omitió comprobar el gasto de combustible al no presentar los comprobantes correspondientes en los formatos autorizados.

En el recurso presentado por Claudia Lucía Charles Lumbreras, la ponencia propone revocar al considerar que la asiste razón a la recurrente en cuanto a que no se valoró debidamente la documentación que presentó en su respuesta al oficio de errores y omisiones, la cual

resultaba suficiente para acreditar el gasto supuestamente no reportado.

En lo referente al recurso de Gloria Sánchez Tallabas, se propone revocar la resolución impugnada porque se considera incorrecto que la autoridad responsable considerara sancionar a la candidata por no utilizar una cuenta bancaria exclusivamente para el manejo de sus recursos de campaña, pues la propia normativa prevé la posibilidad de registrar los gastos en una cuenta específica ya sea nueva o preexistente.

Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 66 de este año promovido por Luis Alberto Zavala Díaz contra la resolución del Consejo General del INE, emitida en un procedimiento de queja en materia de fiscalización, en la cual determinó, por un lado, desechar de plano el procedimiento en lo relativo a hechos relacionados con la presunta contratación y/o adquisición de tiempo en radio y televisión que denunció.

Y en lo relativo a los restantes hechos, consideró infundado el procedimiento instaurado contra un entonces candidato a Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La ponencia propone confirmar la resolución impugnada al considerarse ineficaces los agravios hechos valer contra un auto emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral dentro de un diverso expediente, pues se sostiene en consideraciones ajenas a la determinación objeto de análisis.

Además, como se detalla en el proyecto, se considera que el gasto relativo al promocional analizado sí se encontraba registrado por la candidatura y está permitido conforme lo señala la normativa.

Es la cuenta.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias, Secretario.

Magistrados, esta es su consideración, Magistrada, los asuntos de la cuenta.

¿Alguien desea intervenir?

Al no haber intervenciones, señor Secretario, tome la votación sobre estos proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Con su autorización, Magistrada Presidenta.

Magistrado Sergio Díaz Rendón.

Magistrado Sergio Díaz Rendón: A favor de los proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco.

Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco: También a favor de las consultas. Gracias.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Magistrada Presidenta María Dolores López Loza.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Con los proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Magistrada Presidenta, le informo que los asuntos aprobaron por unanimidad de votos.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 171, así como los recursos de apelación 66 y 70, se resuelve en cada asunto:

Único.- Se confirman las resoluciones impugnadas.

Por otra parte, en los juicios generales 71 y 72, se resuelve:

Primero.- Se acumulan los juicios.

Segundo.- Se confirma la sentencia controvertida.

En cuanto al recurso de apelación 53, se resuelve:

Único.- Se modifica en la materia de controversia la resolución impugnada en los términos del apartado de efectos de la ejecutoria.

En cuanto a los recursos de apelación 68 y 91, se resuelve en cada uno de ellos:

Único.- Se revocan en la materia de impugnación las resoluciones controvertidas para los efectos precisados en los fallos.

En el recurso de apelación 81, se resuelve:

Único.- Se revoca la resolución impugnada.

Señor Secretario General, dé cuenta de los proyectos de los cuales se propone su improcedencia.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdez Saldaña: Con autorización del Pleno.

Se da cuenta con los proyectos de resolución de siete medios de impugnación, todos de este año, en los cuales se propone su improcedencia.

En principio, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 173, en el cual se controvierte la presunta omisión del Tribunal Electoral de Tamaulipas de sustanciar y resolver un medio de impugnación relacionado con el pago de diversas prestaciones derivadas de una relación laboral entre el promovente y el Instituto Electoral local.

En el proyecto, se propone desechar de plano la demanda, ya que no es un acto tutelable en la vía electoral, dejando a salvo los derechos del promovente para que haga valer ante la autoridad que corresponda lo que a su derecho convenga.

Ahora, doy cuenta con los recursos de apelación 49, 75, 78, 80, 86 y 89, de los cuales se controvierte, en cada caso, la resolución del Consejo General del INE relacionada con irregularidades detectadas en los informes de gastos de campaña de personas candidatas a juzgadoras en el proceso electoral extraordinario local en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Aguascalientes, respectivamente.

En todos los casos se propone su desechamiento al haberse presentado de manera extemporánea.

Es la cuenta, Magistrada Presidenta, Magistrada, Magistrado.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Gracias.

Magistrada, Magistrado, están a su consideración los proyectos de la cuenta.

¿Alguna intervención?

Magistrado Sergio Díaz Rendón: Ninguna, Presidenta.

Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco: Tampoco.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Muchas gracias.

Si no hay intervenciones, señor Secretario General, tome la votación sobre estos proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdéz Saldaña: Con su autorización, Magistrada Presidenta.

Magistrado Sergio Díaz Rendón.

Magistrado Sergio Díaz Rendón: A favor de los proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdéz Saldaña:
Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco.

Magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco: De acuerdo.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdéz Saldaña:
Magistrada Presidenta María Dolores López Loza.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: Con los proyectos.

Secretario General de Acuerdos Alfonso Valdéz Saldaña:
Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos.

Magistrada Presidenta María Dolores López Loza: En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 173 se resuelve:

Primero.- Se desecha de plano la demanda.

Segundo.- Se dejan a salvo los derechos de la persona promovente para que los haga valer en la vía y forma que considere pertinente.

Por otra parte, en los recursos de apelación 49, 75, 78, 80, 86 y 89 se resuelve, en cada caso:

Único.- Se desechan de plano las demandas.

Magistrada y Magistrado, habiéndose agotado los asuntos del orden del día y siendo las 13 horas con 51 minutos del día de su fecha, se levanta la sesión.

Gracias.